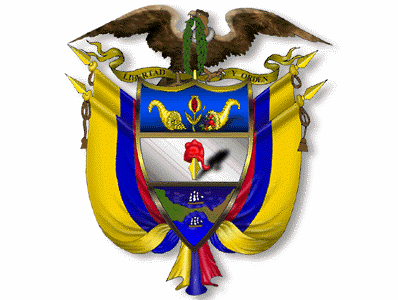
**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA**

**AUTO INTERLOCUTORIO**

Santiago de Cali, cuatro (4) de junio de dos mil veinte (2020)

|  |  |
| --- | --- |
| Radicación No. | 76001-23-33-000-2020-00742-00 |
| Medio de Control: | CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD |
| Solicitante: | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN |
| Solicitud: | RESOLUCIÓN 016 DEL 1 DE JUNIO DE 2020 |

**MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ**

**1. ANTECEDENTES**

El Gerente Liquidador de las Empresas Públicas Municipales de Sevilla E.S.P. en Liquidación, mediante correo electrónico remitido el 2 de junio de 2020, presenta para el trámite de control inmediato de legalidad consagrado en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1 y el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 “Por la cual se reglamentan los Estados de Excepción en Colombia”, la Resolución No. 016 del 1 de junio de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA EL TRABAJO EN CASA Y EL TELETRABAJO, COMO UN INSTRUMENTO DE GENERACIÓN DE EMPLEO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES (TICs), A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES COMO MEDIDAS TRANSITORIAS EN RAZÓN DE LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19”.

2. Por reparto realizado el 2 de junio de 2020 el asunto le correspondió a este Despacho, como sustanciador, para el trámite de rigor.

**2. CONSIDERACIONES**

2.1.- De acuerdo a lo preceptuado en el Acuerdo No. PCSJA20-11529 del 25 de marzo de 2020, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el presente asunto se encuentra exceptuado de la suspensión de términos adoptada en los Acuerdos PCSJA20-11517 y 11526 de marzo de 2020, en concordancia con el Acuerdo PCSJA20-11532 del 11 de abril de 2020, el Acuerdo PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020 y el Acuerdo PCSJA20-11549 del 7 de mayo de 2020.

2.2.- Es sabido que, el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con miras a atender la crisis económica y social derivada de la pandemia Covid-19, y en virtud de ello expidió varios decretos legislativos en el lapso comprendido entre el 17 de marzo y el 17 de abril de 2020. De la misma manera, por medio del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, nuevamente el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con similares propósitos, esto es para conjurar la crisis generada por esta pandemia e impedir la extensión de sus efectos, por el término de treinta (30) días calendario en todo el territorio nacional, lapso comprendido entre el 6 de mayo y el 6 de junio de 2020.

2.3.- Una vez efectuada la declaratoria, el Presidente puede expedir decretos legislativos (gozan de fuerza de ley), que tienen que estar suscritos por todos los ministros y deberán referirse a materias que guarden relación directa y específica con el Estado de Excepción.

Como uno de los mecanismos para garantizar el correcto ejercicio de esas facultades, el artículo 55 de la Ley 137 de 1994 estableció un control automático de los decretos legislativos, que estará a cargo de la Corte Constitucional. A su vez, el artículo 20 dispuso que:

“ARTÍCULO 20. CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición”.

2.4.- El control de legalidad de que trata el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, fue incluido en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011[[1]](#footnote-1), que, además, precisó que la autoridad judicial debía asumir de oficio el conocimiento del asunto, en caso de que la entidad administrativa no efectuare el envío del acto sujeto a control.

2.5.- Ahora bien, de acuerdo a los avisos publicados en la página web de la Rama Judicial – Secretaría del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, se advierte que por proveído del 11 de mayo de 2020, la Magistrada Luz Elena Sierra Valencia, avocó el conocimiento del control inmediato de legalidad de la Resolución No. 009 del 14 de abril de 2020 *“POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO, COMO UN INSTRUMENTO DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES (TICs), A LOS FUNCIONARIOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE SEVILLA E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES COMO MEDIDAS TRANSITORIAS ANTE EL COVID-19”,* expedida por el Gerente Liquidador de las Empresas Públicas Municipales de Sevilla EPS.

Revisado el aviso en referencia, en el cual se adjunta la citada Resolución, se evidencia del contenido de aquélla y de la que correspondió por reparto a este Despacho, que regulan en esencia similares actividades, lo que hace plausible su acumulación al proceso radicado bajo la partida No. 76001-23-33-000-2020-00569-00, en aplicación del principio constitucional de unidad de materia.

2.7. Ciertamente, en virtud del aludido principio, el control inmediato de legalidad de las Resoluciones Nos. 009 del 14 de abril de 2020 y 016 del 1 de junio de 2020, expedidas por el Gerente Liquidador de las Empresas Públicas Municipales de Sevilla EPS, no puede ejercerse de forma separada, porque tienen una relación de conexidad, en la medida que la segunda es casi, una reproducción de la primera, de manera que deben estudiarse de forma conjunta para salvaguardar el principio de seguridad jurídica y garantizar también la coherencia de las providencias emitidas por esta Corporación, en el trámite del control de legalidad.

En consecuencia, se ordenará la acumulación del presente expediente al proceso radicado con el No. 76001-23-33-000-2020-00569-00, que cursa en el Despacho de la Magistrada LUZ ELENA SIERRA VALENCIA y la compensación a que haya lugar.

En mérito de lo expuesto, se

**RESUELVE:**

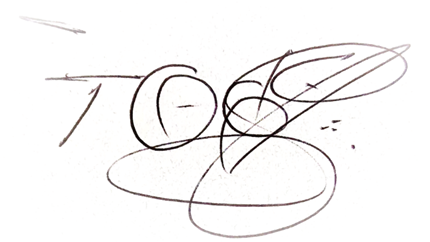
**PRIMERO:** Acumular el presente expediente al proceso radicado bajo la partida No. 76001-23-33-000-2020-00569-00, que cursa en el Despacho de la Magistrada LUZ ELENA SIERRA VALENCIA, acorde con lo explicado precedentemente.

**SEGUNDO:** Por Secretaría remítase copia de esta providencia al citado Despacho y de la carpeta que contiene la Resolución No. 016 del 1 de junio de 2020, expedida por el Gerente Liquidador de las Empresas Públicas Municipales de Sevilla EPS.

**TERCERO:** Notificar de manera electrónica esta providencia al Gerente Liquidador de las Empresas Públicas Municipales de Sevilla EPS y a la representante del Ministerio Público delegada ante este Despacho.

**CUARTO:** Por Secretaría efectúese la compensación a que haya lugar.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ**

**Magistrado**

1. **“ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD.** Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento**”**. [↑](#footnote-ref-1)